

el Informe Técnico-Legal de la ONP, tal como sustentaron para los siete (07) congresistas que sí declararon favorablemente la solicitud de acumulación y el reconocimiento de su derecho pensionario, pero solamente el administrado Juan Mariátegui Malarin está excluido de sus beneficios. En la Resolución Jefatural 125-2008-JEFATURA/ONP (Considerando 12) se aplica a los ingresantes a la pensión de Cesantía, pero no a los Congresistas y Parlamentarios Andinos que precisamente están regidos por su Ley, el Reglamento del Congreso, que hace la calificación, conforme al artículo 21°, segundo párrafo de su Reglamento. Toda esta interpretación errónea que repite los mismos fundamentos de los siete (07) casos declarados conforme a derecho, desdice el fuero administrativo del Congreso y lo que es grave, la confusión jurídica viene de los propios funcionarios del Congreso que sí aplicaron correctamente en los siete (07) casos similares, con este régimen, el segundo semestre del 2011.

27. Resulta pertinente referirnos brevemente que los diplomáticos tienen su Ley del Servicio Diplomático, del mismo modo que para los magistrados del país se aplica la Ley Orgánica del Poder Judicial, y el Reglamento del Congreso de la República tiene fuerza de Ley y está en vigor para los Congresistas y los Parlamentarios Andinos, por lo que debe tenerse en cuenta la normatividad respectiva para el caso en concreto.
28. En ese sentido, con respecto a la Resolución 007-2013-DGA/CR se han transgredido los principios del procedimiento administrativo de legalidad, debido proceso, presunción de veracidad y principio de verdad material, respeto que está debidamente garantizado por la Constitución Política. Aplicando **el principio de Igualdad ante la Ley**, no se ha tenido en cuenta el artículo 21° del Reglamento del Congreso que tiene fuerza de Ley y se ha actuado sin facultades atribuidas administrativamente. No se han merituado los descuentos de 60 meses para el Fondo de Pensiones del DL 20530, constituyéndose la Resolución que se comenta, en inmotivada, **nula ipso iure**, ajena al derecho. Al no reconocer los descuentos de esos cinco años, se violenta el artículo 1ro. de la Ley de Procedimientos Administrativos, que conlleva a producir efectos jurídicos sobre las pretensiones administrativas del Dr. Juan Mariátegui. La Resolución 007-2013-DGA/CR no contiene una relación concreta con el caso específico, tampoco una exposición de razonamiento jurídico y normativo frente a la petición impugnatoria contra la Resolución,